

SINDICATOS, PARTIDOS "OBREROS" Y ESTADO EN LA ARGENTINA PREPERONISTA

Hugo del Campo

1. INTRODUCCION

A partir de la irrupción del peronismo, la relación entre sindicatos, partidos "obreros"¹ y estado adquiere en la Argentina una configuración particular, que se podría sintetizar así:

-la mayor parte del movimiento sindical considera a los partidos "obreros" como enemigos políticos, en un enfrentamiento que alcanza su máxima virulencia entre 1945 y 1955 pero cuyos ecos se prolongan todavía;

-los partidos "obreros", por su parte, no renunciaron nunca a la esperanza de reconquistar los sindicatos perdidos entre 1943 y 1946 y de hacer entender finalmente a los trabajadores quiénes son sus verdaderos representantes;

-la mayoría de esos trabajadores, sin embargo, se empeñan en identificarse con un movimiento político "no obrero".

¹ Llamamos partidos "obreros" a los que intentan expresar los intereses específicos de la clase obrera y hacia ella dirigen el grueso de su propaganda, inspirada en alguna de las corrientes del pensamiento socialista internacional. Esto no implica que la mayoría de sus militantes -y menos aún de sus dirigentes- sean realmente obreros, ni que la mayoría de la clase obrera se sienta efectivamente representada por ellos. En el caso argentino, por el contrario, el divorcio entre los obreros reales y los partidos "obreros" es evidente desde 1945 y no deja de tener fuertes raíces en el período anterior. Es por eso que ponemos el adjetivo entre comillas. Obviamente, en la Argentina pre-peronista, los partidos "obreros" eran el Socialista (PS), el Comunista (PC) y los productos de sus diversas escisiones.

sumamente heterogéneo y de difusa ideología pero capaz de reunir -¿por eso mismo?- un caudal electoral imbatible hasta hace poco y de acceder por esa vía al control del estado, posibilidad que nunca pudieron ofrecer los partidos "obreros";

-es conocido el papel decisivo que desempeña el estado en la distribución de la renta en una economía como la argentina. El movimiento sindical tuvo una experiencia directa de ello en 1945-55 -y también en los años siguientes- y no la olvidaría: recuperar una posición de privilegio en el seno del estado a través de la participación en el poder político, fue desde entonces su objetivo principal. Impedirlo fue, por su parte, el principal objetivo de los sectores capitalistas, y es así como esa peculiar relación entre sindicatos, partidos y estado se vuelca sobre el conjunto del sistema político hasta determinar, en gran medida, su funcionamiento durante treinta años.

Incapaces de alcanzar sus objetivos por la vía electoral, los sectores capitalistas no vacilaron en recurrir una y otra vez al mismo método que habían utilizado los sindicatos en 1945: la alianza con el poder militar. De ese modo, el sector más compacto, organizado y poderoso del aparato estatal se convirtió en el fiel de la balanza política: si el golpe "gorila" pendió como espada de Damocles sobre todos los gobiernos con apoyo o participación sindical, el pacto sindical-militar no dejó de obsesionar a los que carecieron de ese apoyo.

¿Qué papel podían desempeñar dentro de este esquema los partidos políticos, "obreros" o "burgueses"? El poder económico no consiguió, por cierto, expresar y defender sus intereses a través de un partido fuerte y estable, pero ¿acaso fue el peronismo mucho más que la manifestación del poder sindical en el terreno electoral? Así, por carencia o por exceso, los partidos no pudieron canalizar los intereses sociales contrapuestos ni negociar su articulación en el marco de un sistema político de tipo liberal. El juego de esos intereses debió desarrollarse entonces, durante la mayor parte del período, bajo el control nada imparcial de dictaduras militares.

Pero el poder militar acaba de derrumbarse bajo el peso de sus propios crímenes, de su fracaso político y aún bélico, en medio de la crisis económica más catastrófica de nuestra historia. ¿Habrá llegado por fin la hora de los partidos políticos y de la democracia liberal? ¿Se cerrará así el ciclo corporativo y militar de la vida política argentina?

No pretendemos responder a estas preguntas apasionantes que trabajan la conciencia de todos los argentinos, pero ellas no pueden dejar de estar en el fondo de nuestras reflexiones.

Como historiadores, sin embargo, lo único que podemos aportar a su discusión es un intento de explicar cómo y por qué ocurrió lo que ocurrió. Y como "explicar", significa casi siempre para nosotros "contar las cosas desde el comienzo", lo que intentaremos en este trabajo es rastrear, en la historia del movimiento obrero argentino, los antecedentes de esa peculiar relación entre sindicatos, partidos "obrerros" y estado que se consolidó durante la década de gobierno peronista y perduró prácticamente hasta nuestros días, contribuyendo en forma decisiva a modelar un sistema político que hoy parece a punto de cambiar.

2. SINDICATOS Y PARTIDOS "OBREROS"

El problema de la relación entre sindicatos y partidos "obrerros" se planteó en el movimiento obrero argentino desde sus comienzos, constituyendo el eje de todos los debates y la principal línea divisoria hasta la aparición del peronismo.

En un principio, el tema enfrentó a socialistas y anarquistas. Para los primeros, debía existir una estrecha cooperación entre los sindicatos y el PS puesto que ambos perseguían los mismos fines de mejoramiento de la condición obrera. La actividad sindical y la lucha por las reivindicaciones inmediatas constituían la mejor escuela práctica para el desarrollo de la conciencia de clase, que iría acercando paulatinamente los obreros a su partido. Pero, para bregar más eficazmente por sus objetivos específicos, los sindicatos debían tratar de agrupar a todos los trabajadores, sin distinción de ideología, y por eso no debían embanderarse en una determinada posición.

Así, el primer congreso de la Unión General de Trabajadores (UGT) (1903), al mismo tiempo que recomendaba que, "independientemente de la lucha gremial, los trabajadores se ocupen de la lucha política y conquisten leyes protectoras del trabajo dando sus votos a los partidos que tienen en sus programas reformas concretas en pro de la legislación obrera"², aclaraba que "protesta contra la malévola especie lanzada, mediante la cual se trata de hacer creer que el PS es el organizador de este congreso. La UGT ha declarado y persiste en declarar que no pertenece a partido político alguno ni preside sus delibe-

² Oddone, Jacinto, GREMIALISMO PROLETARIO ARGENTINO, Buenos Aires, Libera, 1975, p. 196.

raciones ningún espíritu partidista"³.

Para los anarquistas "organizadores", en cambio, el sindicato era sobre todo el terreno más propicio para la difusión de la idea liberadora que llevaría a la revolución social, de la que las luchas reivindicativas no eran más que esbozos y gimnasia preparatoria. Para evitar toda tentación de desvío economicista, las organizaciones gremiales debían proclamar abiertamente su filiación ideológica, como lo hizo la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) en su 5º Congreso (1905), al recomendar "la propaganda e ilustración más amplia en el sentido de inculcar en los obreros los principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico"⁴.

Igualmente clara era su posición con respecto a los partidos: el artículo 6º de su Pacto de Solidaridad establecía que "nuestra organización, puramente económica, es distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos burgueses y políticos obreros, puesto que así como ellos se organizan para la conquista del poder político, nosotros nos organizamos para que los estados políticos actualmente existentes queden reducidos a funciones puramente económicas, estableciéndose en su lugar una libre federación de libres asociaciones de productores libres"⁵.

Partiendo, pues, de concepciones tan opuestas, la convivencia de socialistas y anarquistas en una misma organización resultaba imposible y, de hecho, fracasaron todos los intentos de fusión. Por otra parte, los socialistas sólo tenían influencia sobre una minoría de los trabajadores organizados: en 1904 la UGT contaba con 7.400 adherentes frente a los casi 33.000 de la FORA.

Este amplio predominio anarquista responde a diverso tipo de razones que acá sólo podremos mencionar.

Para empezar, la mayor parte de los obreros organizados no hacía más que trasladar a su nuevo medio las actitudes e ideolo-

³ Idem, p. 199.

⁴ Abad de Santillán, Diego, LA FORA. IDEOLOGIA Y TRAYECTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO REVOLUCIONARIO EN LA ARGENTINA, Buenos Aires, Proyección, 1971. p. 142.

⁵ Idem, p. 119.

gías predominantes en sus países de origen. El estado oligárquico argentino -tan impermeable a sus demandas y aún más inaccesible a sus representantes que muchos estados europeos- no desmentía esos preconceptos: casi la única faz visible del estado era la represión, y todos los partidos que aspiraban al poder político, cualquiera que fuera su discurso, resultaban igualmente sospechosos.

Por otro lado, el individualismo propio del inmigrante que venía a "hacer la América" se veía reforzado aquí por el predominio de formas de trabajo artesanal o independiente y por las posibilidades de ascenso social. La mayoría de los asalariados consideraba transitoria su situación: ellos no aspiraban a ser obreros bien pagados y protegidos por las leyes, sino propietarios independientes. La frecuente frustración de esta expectativa no llevaba tampoco a la resignación y a la conquista paciente y paulatina de mejores condiciones de vida y de trabajo, sino más bien a la rebelión indignada contra el conjunto de un sistema que se mostraba injusto y opresor. De la ilusión del enriquecimiento individual, muchos pasaban así a la utopía de la revolución social.

Sólo una minoría de los inmigrantes era portadora de una tradición obrera más arraigada; sólo una minoría de los trabajadores tenía un empleo estable y bien remunerado que aspirara a conservar, mejorando sus condiciones. Fue principalmente entre ellos que el reformismo parlamentario predicado por el PS encontraba sus adeptos. Pero incluso este sector le sería pronto disputado por un nuevo rival: el "sindicalismo revolucionario".

La nueva corriente, surgida en el seno del PS, ya había impuesto su punto de vista en el Tercer Congreso de la UGT (1905), sacando una resolución según la cual la representación parlamentaria socialista -Palacios había sido elegido diputado- sólo tenía un papel "secundario y complementario", "y que ella no puede atribuirse nunca la dirección del movimiento obrero, sino atenerse en todos los momentos y circunstancias a las necesidades, fiscalización y mandato de los trabajadores que la eligen"⁶. Expulsada del partido al año siguiente, esta tendencia predominó en cambio desde entonces en la UGT: la central minoritaria sólo había estado vinculada con el PS durante cuatro años.

La escisión sindicalista se presentaba al principio como una alternativa revolucionaria y clasista frente al reformismo

⁶ Oddone, J., op. cit., pp. 248-9.

parlamentario y la tonalidad pequeñoburguesa del PS. Pero pronto evolucionó también hacia posiciones anti-estatales y anti-políticas que la acercaban a los anarquistas. De ellos la separaba, sin embargo, su concepción del sindicato: en lugar de un ámbito más de difusión ideológica, los sindicalistas lo consideraban como la única forma de organización específicamente obrera, apta no sólo para la lucha económica cotidiana sino también para conducir la revolución social, identificada por ellos con la huelga general. Aún después del derrumbe del capitalismo y del estado, los sindicatos constituirían el núcleo esencial alrededor del cual se edificaría la nueva sociedad.

Por otra parte, sostenían que, como organizaciones de masas, los sindicatos debían ser ideológicamente neutrales, lo que también los diferenciaba de los anarquistas, que persistían en la necesidad de un sindicalismo rotulado.

En la década de 1910, sin embargo, la influencia anarquista comenzaba a declinar. Esto reflejaba, por un lado, el debilitamiento de esa corriente en el plano mundial (ya no llegaban al país propagandistas de primera línea como en el siglo pasado), pero también cierta transformación de las condiciones locales.

Desde principios de siglo, la relativa lenidad que hasta entonces había mostrado el estado ante la propaganda anarquista se transformó en una persecución sistemática. Más tarde, la reforma electoral y el acceso al poder del radicalismo difuminaron la imagen del estado como baluarte de la oligarquía, necesariamente inaccesible y hostil, sobre la que se basaba esa propaganda.

Mientras tanto, el paso del tiempo convenía a muchos inmigrantes -y sobre todo a sus hijos- de que debían asumir como definitiva su condición de asalariados y de que, ya que la revolución social se mostraba menos inminente de lo que habían creído, era necesario luchar también por el mejoramiento inmediato de sus condiciones de vida y de trabajo.

Pero la ancestral desconfianza frente a las leyes, los políticos y el estado hacía que la mayoría de los trabajadores tratara de lograr esos objetivos por sus propias fuerzas, a través de la confrontación directa con los patrones, y no por la vía electoral. Quienes capitalizaron la decadencia del anarquismo no fueron entonces los socialistas sino los sindicalistas, que reunían en torno a sus prácticas de "acción directa" a crecientes contingentes de obreros organizados.

Así, cuando decidieron entrar en la FORA lo hicieron para cambiar la orientación de la central. Eliminada la declaración del 5º Congreso -lo que provocó el alejamiento de los anarquistas ortodoxos, ya francamente minoritarios- el 9º Congreso (1915) proclamó la neutralidad ideológica de la FORA y admitió la pluralidad de tendencias en su interior, "aunque sus acciones es imprescindible que se encuadren dentro de la orientación revolucionaria de la lucha de clases y con absoluta prescindencia de los grupos y partidos que militan fuera de la organización"⁷.

La neutralidad ideológica, sin embargo, no significaba lo mismo para sindicalistas y socialistas. Si para los primeros era la condición necesaria para la existencia de sindicatos poderosos y autónomos, que constituían su único campo de acción, para los segundos era sobre todo una barrera que, al impedir el embanderamiento de los gremios en las tendencias mayoritarias, les permitía mantener en ese ámbito una cierta presencia que, cuando las condiciones lo permitieran, tratarían de ensanchar. La convivencia de ambas corrientes en la FORA del 9º Congreso no tardaría entonces en hacerse conflictiva.

Después del reflujo provocado por la desocupación existente durante la guerra, la recuperación económica favoreció en cambio el estallido de las demandas acumuladas y la proliferación de movimientos huelguísticos, a través de los cuales el movimiento sindical creció y se reforzó considerablemente. Así, al reunirse el 11º Congreso de la FORA (1921), estaban en condiciones de asistir unas 500 organizaciones con más de 95.000 cotizantes: se trataba, pues, de una masa nada despreciable sobre la cual no sólo los socialistas sino también Yrigoyen intentaban influir. Pero la mayoría sindicalista -sobre todo los dirigentes de los dos gremios claves de la época: marítimos y ferroviarios- que no se mostraba insensible a los acercamientos presidenciales (y era, de hecho, calificada de pro-yrigoyenista por sus rivales) comenzaba en cambio a defenderse ásperamente ante las pretensiones de socialistas y comunistas.

Respecto a los primeros, el conflicto salió a luz durante el mencionado congreso con el rechazo del delegado de los curtidores, Agustín S. Muzio, por el hecho de ser diputado. Se argumentaba que al ejercer ese cargo había dejado de ser "obrero en actividad", como exigían los estatutos, y que la

⁷ Marotta, Sebastián, EL MOVIMIENTO SINDICAL ARGENTINO. SU GENESIS Y DESARROLLO, Buenos Aires, Lacio, 1961, vol. II, p.186.

aceptación de un diputado como delegado gremial abriría las puertas de la organización a políticos de todo tipo. Desde entonces, y hasta el congreso constituyente de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1936, el rechazo de credenciales de diputados y concejales será ritual en todos los congresos y revelará la persistencia de una mayoría antipolítica en el movimiento sindical.

Con respecto a los comunistas, que habían planteado la adhesión de la central a la Internacional Sindical Roja (ISR) de Moscú, la mayoría sindicalista impuso el rechazo de la moción, que se repetirá también en todos los congresos hasta que los comunistas se retiren de la Unión Sindical Argentina (USA) en 1929.

La ortodoxia sindicalista había llegado a su apogeo con la constitución de esta última central en 1922. Su declaración de principios partía de constatar "la inutilidad de la política colaboracionista, del recurso parlamentario y de la táctica corporativista limitada a la simple obtención de mejoras", y el hecho de que "en la región argentina las tendencias proletarias son manifiestamente adversas al colaboracionismo, antipolíticas y fervientemente revolucionarias". Por lo cual resolvía "desconocer todo derecho de intervención y tutelaje a las fracciones organizadas en partidos políticos en las cuestiones que atañen e interesan al proletariado argentino que milita en las filas de la Unión Sindical Argentina; declinar toda invitación de partidos políticos para intervenir en campañas electorales o de protesta con fines políticos" y "afirmar que la única vanguardia revolucionaria del proletariado argentino la constituyen los aguerridos sindicatos que integran la Unión Sindical Argentina, haciendo suya la tesis: 'Todo el poder a los sindicatos' para el caso de una efectiva revolución como la única que cuadra a la tradición revolucionaria del país"⁸.

El sectarismo sindicalista de la Unión Sindical Argentina conduciría finalmente al retiro de los socialistas, que constituyeron la Confederación Obrera Argentina (COA) en 1926, y de los comunistas, que formaron en 1929 el Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC). Al terminar, pues, la década del 20, la cuestión sindicatos-partidos seguía dividiendo al movimiento obrero como en sus comienzos: dos centrales anti-políticas -la FORA anarquista y la Unión Sindical Argentina- se oponían a dos centrales "políticas", a la vez que, dentro de cada uno de esos campos, los sectores más moderados -ya que el radical

⁸ Marotta, S., op. cit., vol. III, pp. 83-4.

lismo verbal de la Unión Sindical Argentina estaba lejos de traducirse en hechos- se oponían a los más extremos.

Esta fragmentación pareció atenuarse en 1930 con la convergencia de las dos centrales moderadas de la CGT. Pero, como había ocurrido anteriormente, la convivencia de socialistas y sindicalistas en una misma central sólo fue posible mientras la recesión económica y la desocupación acompañadas esta vez por la política represiva del gobierno militar obligaron al movimiento obrero a mantener una existencia puramente vegetativa. Cuando, a partir de 1933, las condiciones empezaron a mostrar se más favorables, las luchas internas se reavivaron.

Reducidos ya los anarquistas a una secta aislada y sin mayor incidencia, esos enfrentamientos se desarrollarían ahora entre sindicalistas, socialistas y comunistas, caracterizándose por la paulatina declinación de los primeros y el crecimiento de la influencia de los dos últimos.

Puede decirse que la decadencia del sindicalismo como tendencia mayoritaria comienza hacia 1922, cuando el congreso constituyente de la Unión Sindical Argentina cuestiona la delegación de los ferroviarios y el tipo de organización que estaban adoptando. Esto motivó que al constituirse la Unión Ferroviaria (UF) -que, con sus 20.000 afiliados, era indudablemente el sindicato más importante de la época- no adhiriera a la Unión Sindical Argentina, y que en 1926 (habiendo ya más que duplicado sus efectivos) se integrara en cambio a la COA, haciendo que sus filas resultaran más nutridas que las de su rival.

La dirección de la UF no era, sin embargo, socialista, y su enfrentamiento con los sindicalistas de la Unión Sindical Argentina había sido más bien circunstancial, de modo que al constituirse el Comité Nacional Sindical de la CGT ambos grupos hicieron causa común, formando una mayoría antipolítica que comenzó por rechazar la incorporación del diputado socialista F. Pérez Leirós.

Pero esa mayoría anti-política ya no reflejaba cabalmente la relación de fuerzas real en los sindicatos. Además de la Federación Obrera Marítima (FOM), cuya importancia relativa iba disminuyendo, los sindicalistas sólo controlaban efectivamente al gremio de los telefónicos y otras pequeñas organizaciones. Fueron perdiendo en cambio durante esos años el control de sindicatos tan importantes como el de trabajadores del estado, gráficos y del calzado, que pasaron a reforzar el bloque socialista nucleado alrededor de La Fraternidad (LF), la Unión Tranviaria (UT), municipales y empleados de comercio.

Concientes de las debilidades de sus bases de sustentación, los dirigentes sindicalistas se aferraron a los cargos directivos de la central, postergando durante cinco años la reunión del congreso constituyente que pondría en peligro su hegemonía, a la vez que trataban de reforzar su posición intensificando su vinculación con el poder político.

Pero todo eso no hacía más que confirmar las acusaciones de burocratización y oficialismo sobre las que se centraba el crecimiento de la oposición socialista, favorecido desde 1934 por el resurgimiento de las luchas reivindicativas que ponían más en evidencia la pasividad de la dirección cegetista. El incremento electoral del PS y la importancia de su representación parlamentaria -debidos, en buena parte, a la abstención radical- a la vez que hacían más creíbles para los trabajadores sus propuestas, aumentaban la ambición y la capacidad de sus dirigentes y afiliados para expandir su influencia en el terreno gremial.

Las circunstancias internacionales, por último, impulsaban también la politización de los trabajadores: el ascenso del fascismo en Europa representaba una amenaza muy real, frente a la cual el peligro de la utilización del movimiento sindical por los partidos "obreros" pasaba a un segundo plano cada vez más secundario. Los sindicalistas no supieron captar plenamente la magnitud de esta amenaza, lo que les valió ser calificados como pro-fascistas por sus rivales.

Dentro de este marco general, la definición del enfrentamiento pasaba concretamente por el control de la UF, que con sus 75.000 afiliados representaba alrededor de un tercio de los efectivos de la CGT y, aliada con los otros gremios del transporte, dominaba la central. Aprovechando el debilitamiento del grupo que la dirigía desde su fundación, producto de un largo e infructuoso pleito con las empresas, una coalición dirigida por socialistas logró desplazarlo en 1934. Con eso, la relación de fuerzas se volcaba decididamente en contra de los sindicalistas, que sin embargo seguían negándose a reconocerlo y sólo pudieron ser desalojados de la cúpula de la CGT por un golpe de mano protagonizado por los principales dirigentes sindicales socialistas a fines de 1935.

Esto produjo la división de la central, pero, por primera vez en la historia del movimiento obrero argentino, los antipolíticos de la CGT-Catamarca sólo representaban una pequeña minoría frente a los "políticos" de la CGT-Independencia.

Este predominio de los partidos "obreros" sobre el movimiento sindical sólo durará cerca de una década, y aunque durante la

misma la oposición socialistas-comunistas tiende a sustituir a la vieja contraposición políticos-antipolíticos, esta última no dejará de reaparecer bajo nuevas formas y es la que, en definitiva, llevará a la segunda división de la CGT en 1943.

Con respecto a lo primero, recordemos que el peso de los comunistas en el movimiento sindical, importante desde su aparición en la escena política, no dejó de aumentar durante las dos décadas siguientes. El entusiasmo despertado en los medios obreros por la Revolución Rusa hizo que sus propuestas encontraran inicialmente un amplio eco, y ya en 1921 tenían suficiente representatividad como para obtener un tercio de los cargos en el consejo federal de la FORA-90 Congreso, a los que renunciaron al no aceptarse la afiliación de la central a la ISR. Los votos favorables a esa afiliación en los referenda convocados por la Unión Sindical Argentina señalan que seguían representando un porcentaje similar de los obreros organizados durante la segunda mitad de la década. Pero, siguiendo las orientaciones de la Comintern, que les habían llevado a separarse de la central, los comunistas no participaron en la formación de la CGT, a la que consideraban fruto de un acuerdo entre dirigentes, sin participación de las bases.

Ellos, en cambio, y pese a la constante persecución policial de que eran objeto, se dedicaron a un intenso trabajo de base, extendiendo principalmente su influencia sobre los obreros de la carne, de la construcción, de la madera, textiles y metalúrgicos. La disciplina y la abnegación de sus militantes fueron ganando la confianza de esos gremios, que contaban entre los más explotados y sumergidos de la época, y así llegaron a organizarlos y a controlar sus sindicatos, no sin tener que disputarlos ásperamente a los socialistas en algunos casos.

En 1935, un nuevo viraje de la Comintern lanzó la consigna del frente popular y los sindicatos comunistas disolvieron el CUSC y pidieron ingresar en la CGT. La tambaleante dirección sindicalista no podía ver con mucho entusiasmo la posibilidad de tener dentro de la central a quienes no habían dejado de vituperarla hasta la víspera y puso una serie de condiciones para su admisión, entre ellas, que los sindicatos "no aceptarán ni tolerarán ninguna consigna que emane de grupos externos".

Sólo después de la deposición de la cúpula sindicalista pudieron los comunistas entrar en la CGT, pero tampoco los socialistas los recibirían con los brazos abiertos: el congreso constituyente de 1936 reservó el derecho de votar y ser elegido miembro de los cuerpos directivos a los sindicatos que tuvieran un año de afiliación a la central, excluyendo así a

los comunistas. Recién en el primer congreso ordinario (1939) éstos participaron entonces con plenos derechos, obteniendo el 38% de los cargos en el Comité Central Confederal (CCC), lo que reflejaba la importancia de sus bases.

Durante esa especie de período de prueba, las relaciones entre socialistas y comunistas habían sido correctas, pero el estallido de la guerra y la firma del pacto germano-soviético alterarían profundamente esa convivencia. Desde entonces, el CCC y las asambleas gremiales se convirtieron en campo de batalla entre los "belicistas lacayos del imperialismo" (socialistas) y los "traidores pro-fascistas" (comunistas). Ante esta situación, el secretariado de la CGT adoptó una actitud poco novedosa: no volvió a convocar al CCC -que estatutariamente debía reunirse cada cuatro meses- durante dos años y medio. En ese lapso, la situación internacional había cambiado: la invasión nazi a la URSS transformó súbitamente la "guerra inter-imperialista" en "guerra de los pueblos por la libertad y la democracia", según la interpretación comunista, lo que parecía eliminar el principal factor de discordia.

Pero cuando el CCC volvió a reunirse finalmente en octubre de 1942, los comunistas descargaron toda su artillería contra el secretariado, con críticas que iban desde el evidente incumplimiento de las disposiciones estatutarias hasta la falta de entusiasmo en las campañas de apoyo a las "democracias" (!), pasando por las consabidas de pasividad y oficialismo. De hecho, los comunistas estaban empeñados desde hacía tiempo en una campaña destinada a desplazar al grupo de ferroviarios dirigido por José Domenech, que dominaba los cuerpos directivos desde 1936 y que se mostraba visceralmente anticomunista y siempre reticente a estrechar vínculos con los partidos "obremos". En la medida en que esta última actitud afectaba también al PS, el sector de gremialistas más directamente ligados al partido -encabezado por F. Perez Leirós y Angel Borlenghi- terminó por aliarse con los comunistas.

La situación hizo crisis en la reunión del CCC encargada de elegir a las nuevas autoridades de la central: la paridad de fuerzas era tal que las dos listas enfrentadas -la Nº 1, encabezada por Domenech, y la Nº 2, por Perez Leirós- se proclamaron ganadoras, lo que llevó a una nueva división de la CGT. Esta no se puede explicar únicamente en función de la puja entre socialistas y comunistas, ya que los candidatos que encabezaban ambas listas eran afiliados socialistas y los votos de los gremios de esa orientación se repartieron entre las dos. Es cierto que también estaban en juego ambiciones personales e intereses de grupo, pero detrás de todo eso era fundamentalmente la vieja cuestión de la relación entre sindi-

catos y partidos la que reaparecía bajo nuevas formas.

Efectivamente, la CGT Nº 1 y la Nº 2 representaban las dos estrategias entre las que oscilaba en esos momentos el movimiento sindical. La primera retomaba en los hechos la tradición sindicalista de prescindencia política y defensa exclusiva de los intereses corporativos, que privilegiaba la capacidad de presión del movimiento obrero a través de la unidad sindical y favorecía la negociación con los diferentes gobiernos al mantener a los sindicatos apartados de la política partidista. La segunda, en cambio, intentaba reforzar los vínculos del movimiento sindical con los partidos "obreros" y llevar a la CGT a desempeñar un papel mucho más activo en la política nacional, con vistas a la formación de un frente popular capaz de aspirar incluso al poder político.

No es casual que el baluarte de la "prescindencia" lo constituyeran los poderosos gremios del transporte (UF, La Fraternidad, Union Tranviaria). Además del número y disciplina de sus afiliados, de su solidez organizativa y financiera, ellos controlaban el sector clave de la economía agro-exportadora y su capacidad de presión era superior a la de cualquier otro sector de la clase trabajadora. Además, la organización líder de ese grupo, la UF, venía sufriendo desde el cambio de manos de 1934 un desgarramiento que la había llevado incluso a la escisión y que la debilitaba considerablemente: sólo la prescindencia podía asegurar la unidad del gremio y mejorar su capacidad de negociación.

Del otro lado estaban casi todos los sindicatos más pequeños y con menores posibilidades de obtener sus reivindicaciones por sus propias fuerzas: concientes de su debilidad individual, veían su suerte mucho más ligada a la del conjunto de la clase y a la evolución de la política nacional. Algunas de esas organizaciones (como las federaciones de la construcción, de la alimentación y de empleados de comercio), habían conocido además en los últimos años una enorme expansión y soportaban mal la hegemonía de los gremios del transporte, cuya importancia relativa estaba ya en franca decadencia.

De hecho, si hubiera que calificar con un solo adjetivo a cada una de las CGT de 1943, no encontraríamos una mejor definición que "ferroviaria" para la primera y "frente-populista" para la segunda, hasta tal punto se superponía a la confrontación socialistas-comunistas el nuevo avatar de la vieja oposición políticos-antipolíticos, encarnados ahora estos últimos por los ferroviarios y sus aliados.

Estas dos corrientes que recorren la evolución del movimiento

obrero argentino desde sus comienzos encontrarían finalmente su síntesis, inesperada y paradójica, en el peronismo. No es casual que Perón haya sido proclamado "primer trabajador" por Domenech -que luego sería, sin embargo, antiperonista- y que haya recibido al mismo tiempo el apoyo decisivo de Borlenghi.

Perón empezó, efectivamente, retomando el discurso de la prescindencia, apoyándose en la CGT Nº 1 y en el gremio ferroviario -es decir, en la vieja tradición de desconfianza e independencia frente a los partidos "obreros"- para eliminar a la más reciente influencia socialista y comunista sobre el movimiento sindical. Pero terminó llevando al mismo a la casi absoluta identificación con un partido y al desempeño de un papel protagónico en la política nacional, concretando así prácticamente -sólo que no a través de ellos sino en contra de ellos- los objetivos perseguidos por los partidos "obreros". Logró así la unificación del movimiento sindical, no a través de la prescindencia respetuosa, sino mediante el más sectario y excluyente embanderamiento político. Todas estas paradojas resultarían incomprensibles si, en esta reseña de las relaciones entre sindicatos y partidos, no tomáramos en cuenta un tercer elemento: el papel del estado.

3. EL MOVIMIENTO SINDICAL Y EL ESTADO

Si bien el movimiento sindical tiene, como hemos tratado de mostrar, una dinámica propia, ella no puede ser ajena a la evolución global de la sociedad, del sistema político y, sobre todo, del estado. No es sorprendente, entonces, que las etapas de predominio anarquista, sindicalista y social-comunista en el movimiento obrero coincidan aproximadamente con las tres formas que adopta el estado durante ese período y que podríamos denominar oligárquico-represiva (hasta 1916), populista-liberal (1916-30) y oligárquico-intervencionista (1930-43), teniendo en cuenta su contenido de clase y su actitud frente a la cuestión social.

Pero así como el problema de la relación partidos-sindicatos no se resuelve durante el período pre-peronista, sino que más bien cambia de forma, la cuestión de las relaciones sindicatos-estado tiene un desarrollo más lineal y que desemboca más naturalmente en la solución peronista.

El estado oligárquico-represivo se ajusta tan bien a la concepción que los anarquistas tenían del estado como el sindi-

calismo anarquista se ajusta a la concepción que el primero tenía del movimiento obrero: cada uno de ellos parecía empeñado en cumplir a la perfección el papel que el otro le atribuía.

Para el obrero anarquista, el estado era el policía que allanaba y clausuraba el local de su sindicato o la imprenta de su periódico; el "cosaco" que lo pisoteaba con su caballo y lo sableaba durante las manifestaciones; el comisario que disponía su arresto durante el estado de sitio; el funcionario que resolvía deportarlo en función de la ley de residencia.

Frente a esta realidad concreta y cotidiana, ¿qué podían argumentar los socialistas? Habían logrado introducir un diputado en el parlamento, pero, al no repetirse, el hecho quedó más bien como la excepción que confirma la regla, lo mismo que la entrevista lograda por los dirigentes de la UF con Roque Sáenz Peña en 1912. Gracias a las campañas del partido se habían votado una serie de leyes sociales, pero ¿se cumplían? y, en todo caso, ¿quién se preocupaba en el gobierno por asegurar su aplicación?

El estado no era, pues, en esta etapa, para la mayoría de los obreros organizados, más que una maquinaria represiva al servicio del capital, imposible de reformar o de conquistar y que simplemente había que destruir.

Simétricamente, para el estado oligárquico-represivo el movimiento sindical no era más que un factor de desorden y perturbación, promovido por agitadores extranjeros que repetían aquí sin fundamentos una propaganda surgida de realidades muy diferentes a la nuestra y que utilizaban las huelgas como forma de gimnasia revolucionaria. Se trataba entonces, fundamentalmente, de un problema policial, y las leyes de residencia y de defensa social eran los instrumentos más adecuados para combatirlo.

La expresión gráfica de este enfrentamiento frontal entre la mayor parte del movimiento obrero y el estado son los episodios violentos y sangrientos que jalonan esta etapa y culminan con la "semana roja" de 1909 y la reacción del Centenario.

Pero la actitud del estado frente al movimiento obrero cambió considerablemente con la llegada al poder del radicalismo. Sin abandonar totalmente la concepción liberal atomística de la sociedad, dentro de la cual poco tenían que hacer las organizaciones corporativas, el radicalismo debía pagar tributo al origen popular de su mandato y diferenciarse del "Régimen" oligárquico haciendo gala de una mayor sensibilidad social.

A esto se sumaba, en el caso de Yrigoyen, una concepción del estado como árbitro de los problemas sociales, con una actitud humanitaria y paternalista hacia los sectores menos favorecidos. Estas predisposiciones iniciales encontraron, sin embargo, las condiciones más difíciles para su realización y desembocaron en las mayores contradicciones y ambigüedades durante su primera presidencia.

Por empezar, el triunfo de la Revolución Rusa y el estallido de otros movimientos similares en otros países europeos hacía pensar a vastos sectores de la clase obrera que la hora de la revolución mundial había llegado, y los anarquistas no dejaban de proclamarlo a los cuatro vientos. Este trasfondo no era ajeno a la formidable oleada de huelgas que desde la finalización de la guerra mundial intentaba recuperar, contando con las promesas de neutralidad y benevolencia del gobierno radical, el poder adquisitivo que los salarios habían perdido durante los años anteriores. Todo esto desembocó en el estallido de la "semana trágica", en el que, paradójica y anacrónicamente, encuentran su más acabada expresión tanto las actitudes características del anarquismo -cuando éste ya había perdido su predominio sobre el movimiento obrero- como las del estado represor (cuando éste había cedido también su preeminencia a una nueva concepción). Las huelgas patagónicas de los años siguientes señalan la continuidad y extensión de este ciclo de violencia.

Para los anarquistas, ésto no hacía más que confirmar lo que siempre habían afirmado: el gobierno de Yrigoyen no se diferenciaba en nada de sus predecesores y la actitud del estado hacia la clase obrera no cambiaría jamás.

La posición sindicalista, en cambio, era mucho más matizada. Al comenzar su presidencia, Yrigoyen había puesto en práctica sus ideas sobre el papel arbitral del estado, actuando como mediador en los conflictos que sostenían marítimos y ferroviarios, y había dado muestras de su buena voluntad al obtener considerables beneficios para los huelguistas. Desde entonces, los dirigentes de ambos gremios (y de la FORA-99 Congreso, que también habían participado en las negociaciones) continuaron manteniendo buenas relaciones con el gobierno y, por ejemplo, jugaron toda su influencia para limitar la expansión del estallido de 1919 y ponerle fin cuanto antes.

Los socialistas -para quienes el yrigoyenismo no era más que una variante demagógica de la "política criolla" (y, además, su rival electoral en el distrito metropolitano)- no se cansaban de denunciar escandalizados esta connivencia.

El período de Alvear, caracterizado por la prosperidad económica, la estabilidad política y la paz social, permitió hacer olvidar los aspectos represivos del gobierno anterior, aumentar considerablemente el salario real -que ya se había duplicado entre 1918 y 1922- y dictar una importante cantidad de leyes sociales. Gracias a estas circunstancias, el promedio anual de huelgas y huelguistas se redujo a menos de la mitad y las movilizaciones de protesta se desarrollaron sin violencia. Algunos dirigentes sindicales seguían teniendo buenas relaciones con el gobierno (como, por ejemplo, el ferroviario Antonio Tramonti con el ministro de obras públicas Roberto M. Ortiz) y el discurso revolucionario y anti-estatal de la Unión Sindical Argentina no pasaba del ámbito verbal.

Es que la tendencia sindicalista que la controlaba iba perdiendo cada vez más esos atributos de su ideología original en aras del realismo. Si la revolución social no estaba tan al alcance de la mano como habían creído, era necesario concentrarse mientras tanto en la conquista de objetivos inmediatos, concretos y posibles. Y si para ello se podía contar con el apoyo -o, al menos, con la neutralidad benévola- del estado, ¿por qué desecharla en nombre de viejos principios que ya no se ajustaban a la realidad? Además, los socialistas contaban ya con una importante representación parlamentaria, ¿cómo podían ellos compensar esa carencia sino gracias a las buenas relaciones que su apoliticismo les permitía mantener con los gobernantes? Postergando el riesgo de convertirse en una secta fijada en los valores del pasado, como estaba ocurriendo con los anarquistas, los sindicalistas se adaptaron pues rápidamente a las nuevas condiciones que creaba la transformación del contenido del estado y de su comportamiento.

Esta transformación, por otra parte, adquirió su expresión más acabada, no exenta de rasgos precursores, durante la segunda presidencia de Yrigoyen. Basándose en su ya legendaria actuación a favor de ferroviarios y marítimos, en las leyes sociales dictadas desde 1916 y en el efectivo mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, pero también, sobre todo, en una creciente identificación emocional -confirmada por la creciente oposición de los sectores ligados a la oligarquía- Yrigoyen buscó durante sus últimos años, y en gran medida encontró, el apoyo de sectores obreros con una intensidad desconocida hasta entonces.

El eje de esa apelación era el agradecimiento y la lealtad que los trabajadores debían demostrar hacia el líder benévolo y paternal, a fin de mantener y aumentar los beneficios obtenidos. Una declaración del comité ferroviario pro-candidatura de

Yrigoyen en 1927 nos proporciona un buen ejemplo de la tonalidad de ese discurso: "Todas las leyes benefactoras y de completo amparo -dice- y principalmente la de jubilaciones, fueron discutidas y sancionadas bajo los auspicios del gobernante más honrado y justo de los últimos tiempos. Para la consecución de esas notables mejoras, sin las cuales nuestro gremio sería todavía un conglomerado sin base, sin orden y sin protección alguna, fue menester que ocupara la presidencia de la república un hombre inteligente, sencillo y trabajador, con una visión clara y profunda de las cosas, dueño de un corazón sano, que es al fin de cuentas lo que se necesita para gobernar este país [...] Y nosotros, todos los ferroviarios, los que constituimos la columna gremial más poderosa del país, obligados por un deber de gratitud y alentados por la certidumbre de llegar a obtener el perfeccionamiento de nuestras leyes protectoras y mayores beneficios aún, debemos formar un solo frente para que, unidas nuestras fuerzas, podamos hacer flamear airosa e inmovible nuestra bandera de paz junto al doctor Hipólito Yrigoyen"⁹.

La deposición y la muerte del caudillo pondría fin a esta incipiente relación entre un gobernante y los trabajadores, pero no, por cierto, al modelo que había introducido.

Ninguno de los gobernantes que sucedieron a Yrigoyen hasta 1943, sin embargo, podría haber retomado este modelo ni tenía mayor interés en hacerlo. Lo primero, porque la situación de la clase obrera durante esa década, lejos de mejorar, tendió más bien a estancarse en bajos niveles, y las escasas leyes sociales que se dictaron debieron ser duramente arrancadas y defendidas por los trabajadores. Lo segundo, porque el "fraude patriótico" reemplazaba con éxito a la "demagogia" como forma de obtener votos.

Pero si los gobiernos de la restauración oligárquica estaban lejos de la "demagogia" proto-populista de Yrigoyen, eso no significa que hayan vuelto lisa y llanamente a la indiferencia frente a los problemas sociales propia del período anterior. Por el contrario, la intervención del estado en los conflictos laborales, así como la atención y el interés con que seguía la evolución del movimiento sindical, no dejaron de crecer durante toda la década.

Esto se debía, por un lado, a la importancia que habían alcanzado las organizaciones gremiales y a la creciente moderación

⁹ Citado por Rock, David, EL RADICALISMO ARGENTINO, Buenos Aires, Amorrortu, 1977, p. 236

de sus dirigentes: baste recordar que la CGT llegó a tener más de 300.000 afiliados y que durante quince años no recurrió una sola vez a la huelga general. La vocación participacionista -y aún oficialista- de ese movimiento sindical que buscaba ante todo su institucionalización no podía dejar indiferente a un estado que en esos momentos expandía sus funciones y tendía a controlar todos los aspectos de la vida social.

Así, el intervencionismo en lo social era también un correlato del que el estado se había visto obligado a asumir en lo económico como consecuencia de la crisis, y reflejaba una tendencia mundial hacia la que se orientaban no sólo los países fascistas, sino también la Inglaterra laborista o los EE.UU. del New Deal. A la intención de aumentar el control del estado sobre el movimiento sindical favoreciendo su institucionalización se sumaba entonces el objetivo de evitar los conflictos laborales o canalizar su solución a través de instancias arbitrales.

Dentro de estas líneas generales, cada uno de los gobiernos de la época afrontó el problema a su manera.

Con Uriburu la situación pareció retrotraerse, agravada, a la etapa del estado represor: fusilamientos, deportaciones, cárcel y allanamientos recayeron principalmente sobre anarquistas y comunistas. El único signo que dio Uriburu de reconocer la importancia alcanzada por la CGT fue extorsionar a su secretario general para arrancarle una declaración favorable al régimen a cambio de la conmutación de la pena de tres obreros condenados a muerte.

La política de Justo, en cambio, fue mucho más sutil. Ya el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires había incluido en su lista de candidatos a diputados nacionales a dos importantes dirigentes de la UF. Durante su presidencia, Justo recibiría periódica y frecuentemente en su despacho a los dirigentes de la CGT, que también tendrían acceso regular a la radio, participarían con representantes de las entidades patronales y del estado en diversas comisiones encargadas de estudiar problemas sociales y actuarían como asesores del presidente del Departamento Nacional del Trabajo (DNT).

A cambio de todo esto, los dirigentes sindicalistas no tardaron en olvidar sus simpatías yrigoyenistas -y aún su fobia a participar en actos comunes con los partidos políticos- para sumarse, en 1932, a un mitín destinado a denunciar un presunto golpe de estado en preparación: la primera intervención de la CGT -y del movimiento sindical argentino- en una cuestión de política nacional fue, pues, en apoyo al General Justo.

Al año siguiente, presionada por los socialistas para que adoptara alguna actitud frente a la política represiva del gobierno y su tolerancia ante la actividad de los grupos fascistas, la Junta Ejecutiva de la CGT respondía con una declaración que no sólo minimizaba esos hechos, asegurando que el movimiento obrero gozaba de completa libertad, sino que terminaba por proclamar la necesidad de apoyar al gobierno "en su decidido propósito de mantenerse dentro de la ley, luchando, para bien general, contra todo intento de sustituir el orden, sea oriundo de la demagogia o venga de la reacción"¹⁰.

Mientras tanto, el Departamento Nacional del Trabajo, que hasta entonces había desempeñado más bien un papel informativo, comenzaba a intervenir activamente en la resolución de los conflictos laborales, ejerciendo cada vez más eficazmente las funciones de mediación y arbitraje que la ley, pero no la costumbre, le acordaban. En 1936 se levantó el primer censo sindical y desde entonces surgió toda una serie de iniciativas que, aunque no llegaron a concretarse, constituían un verdadero programa: arbitraje obligatorio, tribunales de trabajo, salario mínimo, imposición oficial del cumplimiento de los convenios colectivos, creación de un ministerio de trabajo y seguridad social... En 1938 se estudió, incluso, la elaboración de una ley de asociaciones profesionales.

Esta política de acercamiento e institucionalización, no excluía, por cierto, el uso de la represión. Así, la huelga general convocada en 1936 por los comunistas fue severamente reprimida y, dos años después, cinco de los más importantes dirigentes de la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC) eran deportados a la Italia fascista.

El modelo de relación estado-sindicatos inaugurado por Justo no dejaba, pues, de ser tan precursor como el de Yrigoyen, y encontraría su mejor concreción durante el gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires (1936-40). Mientras perseguía implacablemente al comunismo, éste dictaba una profusa legislación social, vigilaba minuciosamente el cumplimiento de las leyes existentes, intervenía activamente en la resolución de las huelgas, imponiendo la conciliación y el arbitraje obligatorios, y promovía la concertación de convenios colectivos en una escala desconocida hasta entonces.

Al mismo tiempo, Fresco mantenía una buena relación con los dirigentes sindicales moderados. "El gobierno de la provincia

¹⁰ BOLETIN DE LA CGT, 25-11-1933

-afirmaba- lejos de ser enemigo de los trabajadores y de su organización en sindicatos, busca y estimula la agrupación y convivencia de todos los sectores del trabajo en asociaciones gremiales para que, dentro de los principios de justicia social y de orden, breguen por su bienestar y reclamen lo que les corresponde", ya que "mientras el estado de tipo liberal sólo reconoce y otorga personería al ciudadano aislado, al trabajador aislado, átomo de la masa productiva, el nuevo estado, que integra dentro de su órbita todas las capacidades, otorga derechos y exige responsabilidades a las asociaciones organizadas de productores"¹¹.

Comentando uno de sus discursos, un periódico que no estaba seguramente entre los más alejados de las fuentes de inspiración del gobernador bonaerense concluía: "El Dr. Fresco presentó el cuadro que más deseábamos, es decir, el de un nacionalismo sindicalista, jerarquizado y totalitario. La obra del Dr. Fresco habrá de completarse con la sindicalización obligatoria de los trabajadores, propiciada por el estado y por él reglamentada"¹².

Recordemos que el inspirador de la política del Departamento Nacional del Trabajo durante la década del 30 -José Miguel Figuerola, antiguo funcionario de Primo de Rivera- fue uno de los principales colaboradores de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y que el jefe del Departamento de Trabajo de la provincia durante la gobernación de Fresco, Armando Spinelli, se desempeñó como director general de trabajo en esa Secretaría.

Con Ortiz, finalmente -ya que la breve presidencia de Castillo no introduce innovaciones en ese aspecto- la tendencia intervencionista del estado rebasa ya el terreno laboral para penetrar en el ámbito propiamente sindical.

Las primeras intromisiones del estado en ese campo se habían producido, y no por azar, en el interior de la UF: la lucha de facciones que desgarraba a la poderosa organización amenazaba con traducirse en una competencia que, al tratar cada una de atraerse el apoyo del gremio mediante la ostentación de una mayor combatividad, terminará por perturbar seriamente el tráfico ferroviario. Ya en 1935 el secretario de la presidencia de la Nación había convocado a Tramonti y Domenech, presionán-

¹¹ CGT-CATAMARCA, 9-4-1937

¹² BANDERA ARGENTINA, 20-2-1937

dolos inútilmente para que llegaran a un acuerdo. Al año siguiente, la expulsión de Tramonti y varios de sus partidarios hizo que éstos pidieran la intervención de la justicia. Pero esa intervención -que sentaba un importante precedente- no solucionó, por cierto, los problemas, y en 1938 el sector tramontista se escindió.

Ortiz, relacionado con Tramonti desde hacía tiempo, no vaciló en apoyarlo, obteniendo el rápido reconocimiento de la nueva asociación. Ante el fracaso de ésta, sin embargo, sólo pudo intentar que el grupo tramontista se reintegrara a la UF en las mejores condiciones, exigiendo personalmente a Domenech la incorporación de los mismos a la comisión directiva. La negativa de Domenech a esta exigencia le obligó a alejarse de la conducción del sindicato: la vinculación entre el movimiento sindical y el estado había llegado a un punto tal que ya no podía dirigir la UF alguien que estuviera enemistado con el presidente de la república.

Si, desde el punto de vista del movimiento sindical, el peronismo se presenta entonces como una síntesis de sus dos principales corrientes, partiendo de la "prescindencia" que lo alejaba de los partidos "obreros" para llegar a involucrarlo plenamente en la política nacional como éstos pretendían, desde el punto de vista de la actitud del estado frente al movimiento sindical también podemos hablar de una síntesis de las tendencias insinuadas durante las tres décadas anteriores.

De la etapa yrigoyenista, el peronismo retomará y desarrollará hasta sus últimas consecuencias los rasgos populistas: el peso del estado se volcará decididamente a favor de los sectores populares, mejorando su situación en gran escala y apelando a su apoyo contra la oligarquía que amenazaría esas conquistas en función de valores como el agradecimiento y la lealtad, en medio de un clima de intensa identificación emocional entre el líder y las masas.

Pero, al mismo tiempo, el estado peronista desarrollará también hasta sus últimas consecuencias las tendencias intervencionistas aparecidas durante la década del 30, extendiendo su acción omnipresente a todo el ámbito de las relaciones laborales, apareciendo como el árbitro inapelable de todos los conflictos y, sobre todo, institucionalizando plenamente al movimiento sindical y ejerciendo un control cada vez más estrecho sobre el mismo.

Para que esto último fuera posible, la actitud del movimiento sindical frente al estado tuvo que variar fundamentalmente. El cambio se inició, como hemos visto, con el acercamiento de los

sindicalistas a Yrigoyen, y continuó a lo largo de la década del 30: dejando atrás su etapa revolucionaria y demasiado débil para conseguir sus reivindicaciones por sus propias fuerzas, el movimiento sindical se volvió, cada vez más hacia el estado en busca de arbitraje y protección, aceptando al principio y reclamando después su intervención en todos los asuntos laborales.

Pero para que esa intervención le fuera favorable era necesario que reforzara su capacidad de influir sobre el poder político. La vía parlamentaria propiciada por los socialistas había mostrado ya sus limitaciones dentro de un sistema esencialmente presidencialista, viciado además por el fraude y el clientelismo que hacían imposible la expansión del partido más allá de ciertos distritos privilegiados. La alternativa del frente popular no era viable más que a largo plazo y siempre que los partidos "obreros" lograran superar su aislamiento con respecto a las demás fuerzas políticas y sociales y vencer la resistencia de los factores de poder que, como el ejército y la iglesia, desempeñaban ya un papel nada desdeñable. Sólo quedaba, como posibilidad concreta e inmediata, la de aumentar la capacidad de presión del movimiento sindical por sí mismo, sin la mediación de los partidos "obreros", aunque esto significara la vinculación con alguna de las coaliciones que estaban efectivamente en condiciones de acceder al poder político y la consiguiente merma de una autonomía que sólo podía ser mantenida a costa de perpetuar su aislamiento y marginalidad. Y esto era lo que ofrecía Perón en 1945.

Las dos líneas de desarrollo del movimiento sindical argentino que venimos de analizar -alejamiento de los partidos "obreros" y acercamiento al estado- hacían que la mayor parte del mismo estuviera preparada para aceptar la propuesta de Perón. La cerrada oposición de los partidos "obreros" y su alianza con los sectores patronales en el frente anti-peronista hicieron el resto: los débiles lazos que los habían vinculado con el movimiento sindical se rompieron, éste se hizo masivamente peronista y entró en estrecha vinculación con el estado, cumpliendo así la ecuación que iba a dominar durante cuarenta años la política argentina.

4. CONCLUSION

Pensamos entonces que, lejos de aparecer como un exabrupto histórico, producto del azar o del cerebro maquiavélico de Perón, los elementos constitutivos de esa peculiar relación entre sindicatos, partidos "obreros" y estado se habían ido acu-

mulando lentamente durante décadas para cuajar rápidamente en los intensos años de 1943-46 al calor de una crisis generalizada que recomponía el sistema político argentino sobre nuevas bases.

Pero esto no explica, evidentemente, ni la consolidación de ese esquema durante el gobierno peronista ni, menos aún, su persistencia durante los treinta años posteriores. Como no es ese el objeto de nuestro trabajo -ni estaríamos tampoco en condiciones de intentar una respuesta- nos limitaremos aquí a dejar planteados algunos interrogantes sobre el tema.

Por empezar, el reforzamiento de la identificación del movimiento sindical con el peronismo durante el decenio de 1946-55 parecería indicar que la experiencia de co-participación en el gobierno no fue decepcionante para el primero. Pero, ¿se trata del mismo movimiento sindical del que hemos venido hablando hasta ahora?, y ¿en qué sentido -o en qué medida- se puede hablar de co-participación?

Hemos intentado demostrar en otro lugar¹³ que la composición del movimiento sindical no cambió sustancialmente entre 1943 y 1946 y que, por lo tanto, el que apoyó a Perón en su ascenso al poder fue fundamentalmente el mismo que se había ido desarrollando durante las décadas anteriores. Pero no se nos oculta que la situación es netamente diferente después de 1946: la incorporación masiva de una enorme cantidad de trabajadores sin experiencia sindical ni política previas a las organizaciones gremiales existentes, ¿terminó por desbordar los canales por los que se encauzó, transformando radicalmente las tradiciones ideológicas y las conductas prácticas del viejo sindicalismo para dar nacimiento a uno nuevo, sustancialmente distinto del anterior? Todos los autores que se han ocupado del tema han señalado esta ruptura, pocos son, en cambio, los que han tomado en cuenta los factores de continuidad. Creemos que el balance entre los dos aspectos queda, entonces, por hacer.

La diferencia más evidente entre el sindicalismo pre-peronista y el peronista es la creciente pérdida de autonomía de este último frente al estado y al liderazgo centralizador y autoritario de Perón. Pero, ¿se puede afirmar que esa pérdida de autonomía fue total? Si las organizaciones sindicales hubieran sido totalmente absorbidas por el aparato estatal, convirtiéndose en un engranaje más de su mecanismo, ¿cómo explicar que

¹³ SINDICALISMO Y PERONISMO. LOS COMIENZOS DE UN VINCULO PERDURABLE. Buenos Aires, CLACSO, 1983

no se hayan hundido junto con el resto del estado peronista en 1955?, ¿que no sólo hayan logrado resurgir en medio de las persecuciones y la proscripción, sino que incluso hayan recuperado una buena porción de su poder?

Por otra parte, admitiendo que el movimiento sindical haya conservado un cierto margen de autonomía, ¿cuál fue realmente su poder, su peso en la adopción de decisiones políticas, durante la década de gobierno peronista? En otras palabras, si es evidente que los obreros organizados tuvieron durante esos años un fuerte sentimiento de participación en el poder, ¿en qué medida esa participación fue real o puramente emocional?

Todo lo cual nos lleva a una cuestión global: ¿cómo establecer el grado de representatividad de Perón con respecto al movimiento obrero de la época o de la manipulación de éste por aquél?

Durante mucho tiempo, se intentó responder a estas preguntas a partir de los cambios producidos en la composición de la clase obrera con la llegada de los migrantes internos, su estado de disponibilidad, su identificación emocional con el líder carismático, etc.

Creemos que otra posibilidad es la que hemos esbozado en este trabajo. Si la orientación impresa al movimiento obrero por el peronismo no representa una alteración sustancial de las tendencias predominantes hasta entonces, sino más bien su concreción y culminación, esto ¿no llevaría a considerarla más como la expresión del nivel de conciencia alcanzado por la clase obrera en aquellos años que como el producto de una maniobra de captación demagógica operando sobre un terreno casi virgen? Dicho de otra manera: hasta ahora se ha tratado siempre de explicar las características del sindicalismo posterior a 1945 como consecuencias del fenómeno peronista, ¿no habrá llegado quizá el momento de ver también al peronismo como el producto de una determinada evolución del movimiento sindical y del nivel de conciencia de la clase obrera argentina?

Los hechos posteriores a 1955 no parecen desmentir estas hipótesis: lejos de aflojarse, los lazos entre el movimiento sindical y el peronismo no han dejado de mantenerse durante treinta años a través de las situaciones políticas más diversas. ¿Fue sólo la interdicción del partido lo que llevó al peronismo a refugiarse en el ámbito sindical e hizo que las organizaciones gremiales asumieran una representación política que no tenía otra vía para manifestarse? ¿O se trata de una identificación más profunda, que hace que para la mayoría de los trabajadores su condición de afiliado a un sindicato sea

inescindible de su condición de peronista, como dos caras de una misma identidad?

Ni el cambio de estrategia de los partidos "obreros" tradicionales, ni el vasto despliegue de sus múltiples variantes más recientes, han logrado revertir esta situación que los mantiene alejados de quienes constituirían teóricamente sus bases. Pero nuevamente nos encontramos, como en 1943-46, en un momento de profundos cambios en la sociedad y en el sistema político. La rebelión de los sectores medios contra la perspectiva de un retorno a la tiranía de las corporaciones y el debilitamiento de éstas como consecuencia de la catástrofe económica abren posibilidades inéditas para el futuro.

Sin embargo, si es poco probable que el movimiento sindical conserve en el nuevo sistema político en gestación el mismo papel que desempeñó durante las últimas décadas, tampoco parece factible a corto plazo que vaya a encauzar su representación política a través de los partidos "obreros" según el modelo de los países mediterráneos europeos.

¿Será muy aventurado suponer que el peronismo, reducido a su esqueleto sindical, retorne a sus fuentes y se transforme en un partido "laborista", más próximo al modelo británico que a los otros populismos latinoamericanos, de los que le separan tantas diferencias? ¿Será quizá por esa vía que el "fenómeno maldito" terminará por integrarse en un sistema democrático-liberal?

Creemos que, después de las trágicas experiencias de la última década y en un momento tan crucial como el que vivimos, buscar una respuesta a estos interrogantes es algo más que una tarea académica. Y que, aunque los historiadores no seamos muy propensos a internarnos por esos terrenos movedizos, habitualmente reservados a los estudiosos del "presente", en este caso no sólo vale la pena sino que es casi una obligación el intentarlo.

Paris, agosto de 1985